

La frenética “toma de control” de la administración Kast

Desde que asumió el poder su objetivo fue marcar una diferencia radical con su antecesor, sobre la base de un diseño elaborado durante la campaña que contempla un mediático despliegue en terreno, centrado en la figura presidencial, y en el copamiento de la agenda legislativa.

Por **Nelly Yáñez N.**



“Este gobierno tiene el legítimo derecho de tomar las medidas que estime pertinentes para agilizar la gestión y revisar aquellos decretos o medidas que no se ajusten a su visión. No se trata de resetear lo hecho por otra administración, se trata de un acto de responsabilidad para cumplir los compromisos con la ciudadanía”

**Paulina Núñez (RN),
presidenta del Senado.**



“A nosotros no nos van a pasar gato por liebre, ni por mucha parafernalia que levanten. Lo central es que con sentido de realidad, como oposición, vamos a defender siempre el bienestar de la gente, sin aceptar retrocesos”

**Loreto Carvajal,
senadora PPD.**

Eran pasadas las 18.30 del martes. A esa hora el Presidente José Antonio Kast recibía los honores de la Guardia de Palacio de La Moneda tras su arribo desde Antofagasta, mientras en simultáneo -a más de 100 kilómetros-, en el Congreso en Valparaíso, el Senado despachaba la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, como parte de los 20 proyectos que la nueva administración marcó con urgencia.

Kast subió a su despacho y se conectó en forma telemática con los ministros José García Ruminot, de la Segpres; Fernando Rabat, de Justicia; Claudio Alvarado, de Interior, y Jorge Quiroz, de Hacienda. Quería conocer los detalles. Era el primer triunfo en el Parlamento, junto a la aprobación de la ley de envejecimiento positivo, que había sido vetada por el expresidente Gabriel Boric y que él había restituido. La evaluación en ese espacio fue positiva. Pero se trataba solo de un paso.

Desde que asumió hace 11 días, Kast apuntó a “tomar el control” del gobierno -un concepto muy usado en el entorno del presidente- desde el minuto uno y marcar así una diferencia tajante con su antecesor.

El milimétrico diseño -afinado tras el triunfo en la segunda vuelta y hoy revisado a diario en el Segundo Piso- contempla con días y horas un mediático despliegue en terreno, con un modelo centrado en la figura presidencial. Y el copamiento de la agenda, a través de decretos, medidas administrativas, proyectos de ley y envío de urgencias,

aprovechando las holguras relativas en el Congreso y la división de la oposición.

“A la base del gobierno de emergencia está no perder ni un minuto de tiempo”, sostiene un integrante de La Moneda.

La evaluación es que cuentan con un plazo de tres meses -hasta la cuenta pública del 1 de junio- para mostrar avances y prevenir un eventual desencanto ciudadano. Y que las primeras tres semanas -hasta Semana Santa- son clave para mostrar el sello y “carácter” de la nueva administración.

Pero la batería de iniciativas para inundar la zona -como lo llama el estratega trumpista Steve Bannon-, y su celeridad, tiene riesgos. Más aún en un contexto internacional complejo.

En La Moneda hay coincidencia de que la prueba de fuego para el presidente está puesta en dos hitos: los cambios que introducirá esta semana al Mecanismo de Estabilización de los Combustibles, Mepco, basado en que el Estado no cuenta con recursos para seguir solventando los elevados precios del petróleo por la guerra en Irán. Se trata de una medida de alto costo social, que podría impactar tempranamente los niveles de aprobación gubernamental y activar molestias gremiales, como las que ya están expresando los camioneros.

Junto a lo anterior está el Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto insigne que Kast anunció en Lirquén -que ingresará a tramitación a principios de abril como máximo- y que esboza el rumbo económico e institucional del gobierno.

Uno de sus principales arquitectos es Quiroz, el mismo que acaba de decir que “al ministro de Hacienda no le pagan por

ser simpático”. Y, en rigor, no lo es. Menos cuando se trata de ajustar la caja fiscal, que dice que encontró desfinanciada con apenas US\$ 40 millones al 31 de diciembre de 2025. De hecho, ya en el verano venía planteando una ley miscelánea con enmiendas en tributos y permisología, que fuera más allá de la idea original de los proyectos individuales de un máximo de cuatro artículos para su rápida tramitación.

Lo concreto es que tanto el Mepco como varias medidas del paquete de reconstrucción -en que está su sello- ya cuentan con férreas resistencias en la oposición. La de los combustibles, por la inflación y su impacto en los sectores más vulnerables. Y la de reconstrucción por el símil con las leyes omnibus o misceláneas del Presidente de Argentina, Javier Milei; la One Big Beautiful Bill, del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o la del sector público de Boric en la que introdujo su norma de “amarres”. Esta iniciativa, parecida a las anteriores, junta proyectos sociales -algunos impopulares, como el límite a la gratuidad universitaria- con temas de reconstrucción y rebajas de impuestos de primera categoría a las empresas, de un 27% a un 23%. Un punto que se ha convertido en uno de los nudos y que tiene a la oposición contra la espada y la pared, pues, como se trata de un solo proyecto, para aprobar la reconstrucción y no quedar mal ante la ciudadanía, tendría que avalar la rebaja de impuestos.

“A nosotros no nos van a pasar gato por liebre, ni por mucha parafernalia que levanten. Lo central es que con sentido de realidad, como oposición, vamos a defender siempre el bienestar de la gente, sin acep-



tar retrocesos", sostiene la senadora Loreto Carvajal (PPD).

A solo 11 días del cambio de mando, el clima político se ha ido crispando. No solo por el contenido de los proyectos, también por el rápido despido de autoridades elegidas por ADP, por las medidas administrativas, por el ingreso a algunos temas valóricos y por la firma de algunos decretos -se salvan los de seguridad, migración y reconstrucción-, y el retiro de los ingresados por Boric.

La lista no es corta y presenta flancos. Entre ellos, el recorte de un 3% a los ministerios, junto a más 1.000 millones adicionales, que tienen en alerta a la ANEF; el retiro de Contraloría de 43 decretos medioambientales para su revisión -ya se restituyó el de las ranitas de Darwin-; el retiro de la negociación ramal, que era una de las banderas del PC y que gatilló la molestia de la CUT, que en abril comienza, además, las

conversaciones por el salario mínimo, la rebaja de las 44 horas laborales a 42 y se apresta a conmemorar el 1 de mayo, la primera manifestación que podría enfrentar la administración Kast.

Se suma a lo anterior el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos -que podría ser reingresado en breve- y el posible indulto a uniformados que están en la cárcel por hechos vinculados al estallido social; más el retiro de cinco decretos en materia energética, y la decisión de retirar tres decretos de compra de terrenos por parte de la Conadi, hecho que terminó en la remoción del director de esa corporación, Álvaro Morales Marileo, por negarse a hacerlo, aunque lo cierto es que ese cargo estaba entre las llamadas 12 balas de plata que puede remover el nuevo jefe de Estado sin pasar por concurso de ADP.

Algunas medidas, incluso, cuentan con

resistencias en el propio oficialismo. La propia Evelyn Matthei, ex candidata presidencial, sostuvo en sus redes sociales que "muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural".

El cuestionamiento de fondo -en la oposición- es que Kast está reseteando las medidas adoptadas por el gobierno anterior, aunque es una práctica común de una administración a otra. De hecho, en 2022, Boric sacó de Contraloría 329 decretos y resoluciones adoptados por su antecesor, Sebastián Piñera. Y Kast, hasta ahora, lleva una cincuentena.

Los textos venían siendo monitoreados desde la campaña a petición del propio

Kast. El primer filtro lo hizo Ideas Repúblicas. Luego, el ingeniero Bernardo Fontaine, encargado de Desafío 90, culminó su trabajo proponiendo 25 proyectos de ley, 40 cambios regulatorios y 25 iniciativas de gestión o acciones concretas que no necesitaban cambios regulatorios ni leyes, y la Oficina del Presidente Electo (OPE) -junto a los ministros designados- agregó nuevas medidas.

¿Gobernanza administrativa?

Faltaban 96 días para la primera vuelta cuando -en el seminario Moneda Patria Investment 2025, del 12 de agosto- Kast, entonces abanderado del Partido Republicano, abrió sus cartas e incendió la pradera con esta frase: "El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica".

En esa oportunidad, el oficialismo -y también la oposición- interpretó sus palabras como una fórmula -similar a la aplicada por Milei- destinada a bypassar al Congreso y gobernar por decretos. Un fantasma que se reactivó la misma noche del 11 de marzo, con la mediática firma de los seis decretos e instructivos sobre control migratorio en la Macrozona Norte, permisología, seguridad, auditoría a los recursos públicos y reconstrucción.

Pero la decisión de Kast -dicen en La Moneda- es fijar su propio estilo, postura que también observan en la derecha.

"Él no va a habitar el poder, él está ejerciendo el poder", comenta el senador UDI Iván Moreira.

Las 20 urgencias enviadas al Parlamento y el anunciado paquete de 40 medidas en reconstrucción son una muestra para la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), de que no está en la intención de Kast saltarse el Congreso.

"Este gobierno tiene el legítimo derecho de tomar las medidas que estime pertinentes para agilizar la gestión y revisar aquellos decretos o medidas que no se ajusten a su visión. No se trata de resetear lo hecho por otra administración, se trata de un acto de responsabilidad para cumplir los compromisos con la ciudadanía", sostiene.

La apuesta del oficialismo -a pesar de las públicas resistencias- es que parlamentarios del Socialismo Democrático y de la DC terminen aprobando el Plan de Reconstrucción, aunque la exigencia desde ese bloque es que los temas sociales y tributarios se envíen por cuerdas separadas.

El senador DC Iván Flores advierte que "no estamos por negar la sal y el agua, pero tampoco estamos dispuestos a aprobar medidas que terminen afectando a las familias y a los sectores más vulnerables de nuestro país". Y advierte que es el momento de La Moneda para evitar despolijidades, "porque no solo se puede adjudicar una derrota, sino que afectar -de paso- al ministro Quiroz y a dos relevantes figuras de Chile Vamos, los ministros Alvarado y García Rumínot, lo que no debiera dejar indiferente a ese bloque".